

Recurso de revocación

Expediente: 01/2022-REV-CG

Actor: Partido Acción Nacional

Autoridad responsable: Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós¹.

Resolución del recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo CGIEEG/015/2022, dictado por este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato², en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en el recurso de revisión TEEG-REV-05/2022.

1. Antecedentes.

1.1 Acuerdo CGIEEG/264/2021. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante acuerdo CGIEEG/264/2021, este Consejo General atendió la solicitud realizada por Juan José Corrales Gómez, por propio derecho y ostentándose como representante de Fuerza Migrante A.C., respecto a que se emitieran acciones afirmativas para que se cuente con diputaciones migrantes.

En el acuerdo se determinó que no era posible incorporar la figura de diputaciones migrantes a través de acciones afirmativas.

1.2 Revocación del acuerdo CGIEEG/264/2021. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dictó sentencia en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEEG-JPDC-211/2021 en la que, entre otros aspectos, resolvió que el Consejo General de este Instituto sí cuenta con facultades para emitir acciones afirmativas en materia de diputaciones migrantes, sin que ello implique un exceso en su facultad reglamentaria.

Por lo tanto, revocó el acuerdo CGIEEG/264/2021 en lo que fue materia de la impugnación, y vinculó al Consejo General de este Instituto para que realizara un análisis sobre la viabilidad de emitir acciones afirmativas en favor de la comunidad migrante de Guanajuato radicada en el extranjero, para contar con diputaciones con dicha calidad en el Congreso del Estado para el próximo proceso electoral.

1.3 Acuerdo CGIEEG/015/2022. El ocho de marzo, este Consejo General aprobó, por cuatro votos a favor, un voto concurrente y dos votos en contra, el acuerdo CGIEEG/015/2022, mediante el cual se dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente TEEG-JPDC-211/2021.

¹ En lo subsecuente todas las fechas corresponden al año dos mil veintidós, salvo precisión en contrario.

² En adelante: Instituto

En el acuerdo se consideró procedente emitir acciones afirmativas a favor de personas guanajuatenses migrantes residentes en el extranjero, así como de personas con alguna discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual.

1.4 Presentación del recurso de revocación y desechamiento. El diez de marzo, el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General presentó recurso de revocación en contra del acuerdo CGIEEG/015/2022.

El diecisiete de marzo, este Consejo General lo radicó con el número de expediente 01/2022-REV-CG, el cual fue desechado de plano al considerar que las cuestiones relativas al cumplimiento de las sentencias emitidas por las autoridades jurisdiccionales resultan ser cuestiones de la competencia de dichos órganos de impartición de justicia.

1.5 Acuerdos plenarios de cumplimiento de sentencia. El dieciséis de marzo, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dictó acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia dentro del expediente TEEG-JPDC-211/2021.

Posteriormente, el veintidós de marzo emitió otro acuerdo plenario dentro del mismo expediente en el que determinó que no hubo exceso en el cumplimiento de la sentencia.

1.6 Impugnación en contra del desechamiento del recurso de revocación 01/2022-REV-CG. El veintitrés de marzo, el Partido Acción Nacional presentó ante el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato recurso de revisión en contra de la resolución por la que se declaró improcedente el recurso de revocación 01/2022-REV-CG.

1.7 Revocación del desechamiento del recurso de revocación 01/2022-REV-CG. El dieciséis de mayo, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resolvió el recurso de revisión TEEG-REV-03/2022, interpuesto en contra de la resolución emitida por este Consejo General en el recurso de revocación 01/2022-REV-CG.

En la sentencia, el órgano jurisdiccional local revocó la resolución emitida el diecisiete de marzo, por este Consejo General en el recurso de revocación 01/2022-REV-CG, al considerar que dicho recurso es la vía idónea para cuestionar la legalidad de las medidas afirmativas.

Asimismo, se ordenó a este órgano colegido analizara la procedencia del asunto, y en caso de no actualizarse alguna causal de improcedencia, admitiera a trámite la demanda y continuara con su sustanciación y posterior resolución de fondo de la controversia, dentro del plazo establecido en el artículo 395 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato³.

La sentencia de mérito fue notificada al Instituto el diecisiete de mayo mediante el oficio TEEG-IP-ACT-81/2022, signado por el actuario del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

1.8 Admisión y resolución del recurso de revocación 01/2022-REV-CG. El diecinueve de mayo, este Consejo General admitió el recurso de revocación 01/2022-REV-CG, mismo que fue resuelto en sesión extraordinaria celebrada el

³ En lo subsecuente ley electoral local.

veintiséis de mayo, determinado confirmar el acuerdo CGIEEG/015/2022 por cuatro votos a favor y tres votos en contra.

1.9 Impugnación en contra de la resolución dictada en el recurso de revocación 01/2022-REV-CG. El dos de junio, el Partido Acción Nacional presentó ante el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato recurso de revisión en contra de la resolución que antecede.

1.10 Revocación de la resolución emitida por el Consejo General dentro del recurso de revocación 01/2022-REV-CG. El tres de agosto, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resolvió el recurso de revisión TEEG-REV-05/2022, interpuesto en contra de la resolución emitida por este Consejo General en el recurso de revocación 01/2022-REV-CG.

En la sentencia, el órgano jurisdiccional local revocó la resolución emitida al considerar que no se atendió la totalidad de los planteamientos formulados por el partido político en el recurso de revocación.

Asimismo, se ordenó a este órgano colegido dicte una nueva resolución en la que se dé contestación a todos y cada uno de los planteamientos hechos por el partido recurrente. Además de observar las directrices fijadas en la resolución, respecto de la necesidad de realizar un estudio previo a emitir medidas afirmativas en favor de personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, así como darles en ello la participación que merecen tales grupos para contar con diputaciones en el Congreso del Estado en el próximo proceso electoral.

La sentencia de mérito fue notificada al Instituto el ocho de agosto mediante el oficio TEEG-ACT-316/2022, signado por la actuario del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

1.11 Solicitud de aclaración de sentencia y respuesta. El nueve de agosto, mediante oficio P/172/2022, la consejera presidenta del Consejo General solicitó aclaración de la sentencia dictada en el recurso de revisión TEEG-REV-05/2022 al órgano jurisdiccional.

El once de agosto, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato determinó la improcedencia de aclaración de sentencia, misma que fue notificada a este Instituto al día siguiente.

1.12 Consulta sobre estatus de resolución al TEEG y respuesta. El veintidós de agosto, mediante oficio UTJCE/837/2022, el encargado de despacho de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de este Instituto solicitó al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato conocer si la resolución dictada en el recurso de revisión TEEG-REV-05/2022 se encontraba firme.

En misma fecha, la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato acordó informar a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la recepción de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de la resolución.

El acuerdo de mérito fue notificado al Instituto el veintitrés de agosto mediante el oficio TEEG-ACT-329/2022, signado por la actuario del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

1.13 Desechamiento del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El veintiséis de agosto, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal desechó, por extemporánea, la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente SM-JDC-91/2022⁴, promovido contra la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato en el recurso de revisión TEEG-REV-05/2022.

1.14 Consulta a la Sala Regional. Mediante oficio UTJCE/894/2022 de fecha dos de septiembre, el encargado de despacho de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de este Instituto solicitó a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, conocer si la resolución dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-91/2022 se encontraba firme.

El seis de septiembre, la magistrada presidenta interina de la Sala Regional informó que en contra de la sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente SM-JDC-91/2022 se interpuso recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

1.15 Consulta a la Sala Superior. Mediante oficio UTJCE/945/2022 de fecha quince de septiembre, el encargado de despacho de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de este Instituto solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informara si ya se había resuelto el recurso de reconsideración SUP-REC-398/2022⁵, interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey en el expediente SM-JDC-91/2022.

El diecinueve de septiembre, la presidenta por ministerio de ley del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó informar al encargado de despacho de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral que el catorce de septiembre fue resuelto el recurso de reconsideración, en el sentido de desechar la demanda dada su presentación extemporánea.

2. Trámite y substanciación del recurso de revocación.

2.1 Interposición del recurso de revocación. El diez de marzo, se recibió el escrito signado por Raúl Luna Gallegos, representante propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo General, mediante el cual promueve **recurso de revocación** en contra del acuerdo **CGIEEG/015/2022**, referido en el antecedente 1.3 de la presente resolución.

2.2 Radicación. El diecisiete de marzo se emitió el auto de radicación del recurso promovido, registrándose bajo el número de expediente **01/2022-REV-CG**. Además, en el auto se determinó desechar de plano el recurso por notoria y manifiesta improcedencia.

⁴ Visible en <https://www.te.gob.mx/buscador/>

⁵ Visible en https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0398-2022.pdf

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 408, último párrafo, de la ley electoral local, se tuvo por notificado personalmente al recurrente.

2.3 Admisión. De conformidad con lo señalado en los antecedentes 1.6, 1.7 y 1.8 el desechamiento fue impugnado, revocado y notificado a este Instituto, por lo cual el diecinueve de mayo se determinó su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 del *Reglamento de sesiones de órganos colegiados* de este Instituto.

Asimismo, se instruyó a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

2.4 Primera resolución y su revocación. De conformidad con lo señalado en la parte final del antecedente 1.8 se confirmó el acuerdo CGIEEG/015/2022.

Asimismo, tal y como se desprende de los antecedentes 1.9 y 1.10 se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución, la cual fue revocada, ordenándose la emisión de una nueva.

2.5 Fin de cadena impugnativa. Tal y como se desprende de los antecedentes 1.12, 1.13, 1.14 y 1.15 la cadena impugnativa de la sentencia dictada en el recurso de revisión TEEG-REV-05/2022 ha concluido.

3. Considerandos.

3.1 Competencia. Este Consejo General es competente para conocer y resolver el recurso de revocación interpuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 392 y 394 de la ley electoral local.

Se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 392 de la ley electoral local, toda vez que se interpone en contra de un acuerdo emitido por este Consejo General, del cual no procede algún otro medio de impugnación previsto en el ordenamiento legal en comento⁶.

3.2 Obligación de cumplir sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 423 de la ley electoral local, este Instituto está obligado a cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato al haberse resuelto el último medio de impugnación disponible.

3.3 Estudio de las causales de sobreseimiento. En el presente asunto no se actualiza alguna causal de sobreseimiento, de conformidad con lo siguiente:

a) La fracción I, del artículo 421 de la ley electoral local no se actualiza, pues no existe constancia en el expediente de la que derive que el recurrente se haya desistido de la impugnación promovida.

b) No existe constancia en autos de la que derive que el acto reclamado sea inexistente o que hayan desaparecido las causas que motivaron la interposición del

⁶ La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-REC-188/2022, sostiene que conforme a la doctrina procesal los recursos ordinarios se clasifican en horizontales y verticales. Los recursos horizontales son aquellos resueltos por quien emitió el acto, es decir, revisa su propia actuación; para lo cual, se requiere ineludiblemente la instancia de parte, dado que la autoridad de manera oficiosa no puede revocar sus propios acuerdos, lo cual acontece en el caso.

medio de impugnación, de tal manera que haya quedado sin materia, siendo entonces que, en la especie, no se actualizan las causales de sobreseimiento previstas en las fracciones II y III del artículo 421 de la ley electoral local.

c) La causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 421, no aplica en el caso del recurso de revocación promovido, ya que el mismo se interpuso por un partido político y no por una ciudadana o ciudadano en lo particular.

d) A partir de la admisión del recurso de revocación, determinada en el auto del diecinueve de mayo, no se actualiza alguna causa de improcedencia del recurso, como se detalla a continuación:

La fracción I, del artículo 420 de la ley electoral local no se actualiza, toda vez que el escrito mediante el cual se interpone el recurso de revocación sí está firmado por el recurrente.

El supuesto previsto en la fracción II, del artículo 420 de la propia ley electoral local no se actualiza, pues la impugnación presentada se interpuso dentro del término de cuarenta y ocho horas previsto por el artículo 393 de la propia normativa electoral.

Cabe precisar que el acuerdo impugnado CGIEEG/015/2022 fue aprobado por el Consejo General el ocho de marzo a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos y de la razón de recibido impuesta en el recurso se aprecia que fue presentado el diez de marzo a las quince horas con catorce minutos, es decir, dentro del plazo establecido por la ley electoral local, al haber transcurrido cuarenta y seis horas con treinta y nueve minutos.

No se surte el supuesto jurídico previsto en la fracción III del artículo 420 de la ley electoral local considerando que, como partido político se encontraría obligado a atender las medidas afirmativas establecidas en el acuerdo impugnado.

El supuesto previsto por la fracción IV del multicitado artículo 420 no se actualiza, puesto que el acto impugnado no se considera consumado de forma irreparable, pues el proceso electoral en el que se deberán aplicar las medidas afirmativas no ha iniciado, máxime que para su implementación es necesario la emisión de los lineamientos correspondientes.

El promovente del recurso sí cuenta con la personería que ostenta como representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto al existir registros en esta institución que lo acreditan con tal carácter, por lo que en tal sentido no se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 420 de la ley electoral local.

Tampoco se actualiza la hipótesis jurídica prevista en la fracción VI del artículo 420 en mención dado que la legislación electoral en vigor no prevé la existencia de un medio de impugnación que debiera promoverse de forma previa al recurso de revocación, para obtener la modificación, revocación o anulación del acuerdo impugnado.

Ahora, respecto a la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 420 de la ley electoral local, no se encuentra actualizada en la especie, toda vez que no existe alguna constancia de la que derive que el impugnante esté tramitando otro medio de impugnación que pueda tener por efecto modificar, revocar o anular

del acuerdo impugnado, pues tal y como se refiere en el punto 2.5 de la presente resolución, la cadena impugnativa ha concluido.

El recurso de revocación no se interpuso contra actos o resoluciones que hayan sido materia de otro medio de impugnación que haya sido resuelto en definitiva, ni contra actos o resoluciones emitidos en cumplimiento a una resolución definitiva dictada en un medio de impugnación, por lo que en tal sentido no se actualizan las causales de improcedencia que se prevén en las fracciones VIII y IX del artículo 420 de la ley electoral local.

Si bien, previamente este Consejo General se había pronunciado sobre el desechamiento del presente recurso y en un segundo momento sobre su admisión y estudio de fondo, también lo es que este nuevo pronunciamiento deriva de la atención a la resolución dictada por el órgano jurisdiccional⁷ de conformidad con lo dispuesto en el artículo 423 de la ley electoral local.

Considerando que el acuerdo impugnado fue emitido por el Consejo General de este Instituto y no tiene previsto un medio de impugnación diverso al interpuesto por el recurrente, no se surte la hipótesis contenida en el artículo 420 fracción X de la ley electoral local.

Finalmente, no se advierte la actualización de alguna diversa causa de improcedencia que derive de las disposiciones normativas contenidas en la ley electoral local.

3.4 Oportunidad: Tal como se revisó en el apartado anterior de esta resolución, el recurso de revocación promovido por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo CGIEEG/015/2022 se presentó oportunamente, dentro del término de cuarenta y ocho horas establecido en el artículo 393 de la ley electoral local, pues dicho acuerdo fue aprobado el ocho de marzo a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos y el recurso de revocación fue presentado el diez de marzo a las quince horas con catorce minutos, transcurriendo cuarenta y seis horas con treinta y nueve minutos.

Aunado a lo establecido en el apartado de antecedentes, en concreto en el numeral 1.15, donde se refiere que la Sala Superior informó a este Instituto que el catorce de septiembre fue resuelto el recurso de reconsideración, en el sentido de desechar la demanda dada su presentación extemporánea y al no existir medio de impugnación pendiente de resolución dentro de la cadena impugnativa del presente asunto es preciso emitir una nueva resolución tal y como fue mandatado por el Tribunal Estatal Electoral del Guanajuato.

3.5 Forma. El recurso de revocación presentado cumple con los requisitos de forma establecidos por el artículo 382 de la ley electoral local, toda vez que contiene el nombre y domicilio del promovente; se detalla el acto o resolución que se impugna; el organismo electoral del cual proviene el acto o resolución impugnado; también se detallan los antecedentes del acto o resolución recurrido; los preceptos legales que se consideran violados; además de expresarse los agravios que presuntamente causan al recurrente el acuerdo impugnado, realiza una manifestación sobre los terceros interesados y se contiene un capítulo correspondiente al señalamiento de pruebas.

⁷ Cuya cadena impugnativa ha concluido, tal y como se refiere en el apartado 2.5 de la presente resolución.

3.6 Legitimación y personería. El partido político recurrente está legitimado para interponer el recurso de revocación contra el acuerdo CGIEEG/015/2022 toda vez que como partido político se encontraría obligado a atender las medidas afirmativas establecidas en el acuerdo impugnado que, en su caso, se aplicarían en el próximo proceso electoral.

Por otra parte, como se dijo en el apartado 3.3, inciso d), del presente acuerdo, el ciudadano Raúl Luna Gallegos sí cuenta con la personería que ostenta como representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto al existir registros en esta institución que lo acreditan con tal carácter.

3.7 Definitividad. Este requisito se surte en la especie, dado que, conforme a la ley electoral local, no procede ningún medio o recurso previo a través del cual pudiera ser combatido el acuerdo CGIEEG/015/2022, de manera que debe entenderse para los efectos de procedencia, como una determinación definitiva. Además de que tal y como se asentó en el apartado 2.5 de la presente resolución, la cadena impugnativa de la sentencia dictada en el recurso de revisión TEEG-REV-05/2022, en la que se ordena la emisión de una nueva resolución, ha concluido.

3.8 Agravios. De acuerdo con el contenido del escrito impugnativo, los agravios vertidos por el Partido Acción Nacional son:

- I. Exceso en el cumplimiento de la sentencia.
- II. Ausencia de motivación y fundamentación.
- III. Incumplimiento de motivación reforzada que exige la implementación de una acción afirmativa, por lo que la medida dictada no cumple con los requisitos de idoneidad y necesidad.
- IV. Incongruencia interna y externa.
- V. Vulneración al principio de proporcionalidad.
- VI. Vulneración a los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos.
- VII. Falta de motivación y fundamentación.

Al respecto es conveniente señalar que, si bien previamente este Consejo General analizó y dio respuesta a los agravios expuestos por el partido impugnante, lo hizo a la luz de la construcción argumentativa contenida en el acuerdo CGIEEG/015/2022; mientras que ahora lo hace partiendo tanto de lo argumentado y razonado en la sentencia materia de cumplimiento, dictada en el recurso de revisión TEEG-REV-05/2022 por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, así como del acuerdo en cita.

3.9 Método de estudio. Como cuestión previa, es importante referir que el recurso de revocación interpuesto se rige por el principio de estricto derecho, por lo que no procede la suplencia de la queja, por tanto, este Consejo General no puede complementar las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios cuando no se deduzcan claramente de los hechos expuestos, permitiéndosele únicamente conocer y resolver con base en aquellos argumentos expresamente planteados por quien promovió el recurso. Lo anterior guarda relación con la tesis de nuestro más Alto Tribunal que lleva por rubro: AGRAVIOS. PRINCIPIO DE ERICTO DERECHO⁸.

⁸Registro digital: 256180, consultable en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/256180>

Mencionado lo anterior, se señala que el análisis de los agravios se realizará de forma separada y en el orden en el que fueron expuestos con el objetivo revisar todos sus planteamientos de manera fundada y motivada, mientras que en la resolución primigenia se analizaron de forma conjunta. El análisis que se hará es conforme a lo establecido en el criterio jurisprudencial de la Sala Superior 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN⁹.

3.10 Decisión. Asiste en parte la razón al partido político impugnante. De acuerdo con lo que se razona en las siguientes líneas, los agravios vertidos por el Partido Acción Nacional resultan parcialmente fundados y operantes, por lo que, **procede modificar el acuerdo CGIEEG/015/2022**, ello en acatamiento de la resolución dictada en el recurso de revisión TEEG-REV-05-2022.

I. Exceso en el cumplimiento de la sentencia.

Son **infundados**, los argumentos impugnativos relativos a la aseveración del partido político de que no se dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada dentro del expediente TEEG-JPDC-211/2021, al excederse en su cumplimiento, con ello violando el principio de legalidad.

Se consideran infundados, toda vez que el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia, de fecha dieciséis de marzo, determinó el cumplimiento formal de la sentencia, sin que hiciera referencia a algún exceso en el cumplimiento de esta o transgresión de alguna disposición normativa, tal y como quedó asentado en dicho acuerdo que a la letra dice:

«Visto el oficio y el anexo de cuenta, quienes integran el Pleno acuerdan:

Primero. ...

Segundo. Analizado el contenido del acuerdo, se tiene formalmente cumplida la sentencia dictada por este *Tribunal* dentro del juicio en que se actúa, por las siguientes razones...

(...)

Por tanto, se concluye que la sentencia del 22 de junio de 2021 ha sido formalmente cumplida.»

Así pues, del acuerdo plenario se identifica que la autoridad jurisdiccional tuvo por formalmente cumplida la sentencia dictada en el expediente TEEG-JPDC-211/2021, sin que hiciera referencia a un exceso en su cumplimiento o alguna transgresión de disposición normativa y con ello al principio de legalidad.

Además, en otro acuerdo plenario de fecha veintidós de marzo, dictado dentro del expediente en cita, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato lo reiteró en los siguientes términos:

«En primer término, cabe referir que aún y cuando en el rubro del acuerdo se menciona que se emite para dar cumplimiento a la referida sentencia, ello quedó satisfecho en el "punto 5" denominado "Cumplimiento a la resolución del TEEG", en el cual **la responsable no incurrió en exceso**, ya que declaró la procedencia

⁹ Consultable en Tercera Época, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. En la página de internet: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=4/2000>.

de una medida afirmativa a favor de la comunidad migrante de Guanajuato radicada en el extranjero, sosteniendo la obligación de los partidos políticos y coaliciones de postular cuando menos una fórmula de candidaturas propietaria y suplente dentro de los primeros cuatro lugares de la lista de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional para el proceso electoral siguiente

(...)

Por otro lado, el hecho de que en el "punto 6" del acuerdo impugnado se haya emitido de manera adicional acciones afirmativas para distintos grupos en situación de vulnerabilidad como personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, ello **no constituye un exceso en el cumplimiento** de la sentencia, dado que el Consejo General cuenta con una amplia facultad reglamentaria que le permite emitir tales medidas sin que necesariamente dependan de una resolución del Tribunal para que pueda desplegarla.»¹⁰

De manera que son **infundados** los agravios expuestos en el sentido de que no se dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de mérito, al excederse en su cumplimiento y con ello transgrediendo el principio de legalidad.

II. Ausencia de motivación y fundamentación

Previo al análisis del agravio planteado, es conveniente precisar que, si bien el encabezado del agravio contenido en el recurso hace referencia a la «ausencia de motivación y fundamentación», en su desarrollo se señala como agravio la «indebida fundamentación y motivación»¹¹, por lo que el análisis del agravio en estudio se da a la luz de los razonamientos contenidos en el apartado y no en el encabezado.

Pues de conformidad con la tesis de jurisprudencia de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR¹², la falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa.

En este sentido, hay falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica.

Mientras que hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso.

¹⁰ Consultable en la siguiente liga electrónica:

<http://teeg.gob.mx/estrados/2021/pleno/acuerdos/generales/TEEG%20JPDC-211-2021/01-230322-0930.PDF>

¹¹ Cuyos efectos son diferentes de conformidad con lo señalado en el apartado VII de la presente resolución.

¹² <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170307>

Aclarado lo anterior, se puede entrar al análisis de los planteamientos formulados por el partido político impugnante, quien señala que la determinación adolece de una **indebida** fundamentación y motivación

Al respecto, en el caso en estudio, no se desprende en modo alguno que el acto impugnado carezca de fundamentación, como erróneamente lo manifiesta la parte impugnante, pues basta tan solo recurrir a su contenido para que se desprenda de manera indubitable que dicha actuación contiene la fundamentación que consideró el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, tales como las disposiciones constitucionales, convencionales y legales, así como precedentes jurisdiccionales nacionales e internacionales en las que se sustenta la determinación.

Por otro lado, el partido político impugnante señala que el acuerdo no se encuentra debidamente motivado al referir que no se realizó un estudio objetivo que justifique la viabilidad de la acción afirmativa, ni las razones por las que se determinó la vía de postulación; por lo que la acción afirmativa se basa en una apreciación subjetiva, y cuya emisión se dio sin la participación de actores políticos o de los grupos considerados en situación de vulnerabilidad.

Al respecto, tal y como lo refiere el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en la sentencia del recurso de revisión TEEG-REV-05-2022, no es suficiente que este Consejo General —con base en su facultad reglamentaria— emita y autorice acciones afirmativas sin que previamente se realice un estudio que arroje datos objetivos y razonables sobre los cuales se puedan decidir los términos, condiciones y alcances que tendrán las medidas.

Pues de conformidad con la Recomendación N° 32, emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas¹³, en su 75° periodo de sesiones que tuvo verificativo del 3 al 28 de agosto de 2009, las medidas especiales o acciones afirmativas deben concebirse o aplicarse en función de las necesidades y basarse en una evaluación realista, es decir deben basarse en datos precisos y desglosados de las personas, grupos o comunidades afectadas.

Por tanto, las evaluaciones de la necesidad de medidas especiales se basarán en datos precisos, desglosados por raza, color, linaje y origen étnico o nacional y que incorporen una perspectiva de género.

Además, los Estados deben asegurar que las medidas especiales se conciban y apliquen después de haber consultado a las comunidades beneficiarias, es decir, después de que hayan participado activamente en su construcción, lo cual no aconteció con los grupos contemplados en el considerando 6 del acuerdo CGIEEG/015/2022.

De conformidad con lo anterior, así como a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato en la sentencia recaída al recurso de revisión TEEG-REV-05/2022, el agravio resulta **parcialmente fundado**.

No pasa desapercibido para este Consejo General que al determinarse la necesidad de realizar un estudio previo a la emisión de las medidas afirmativas, la parte actora alcanzó su pretensión. Sin embargo, esta autoridad se encuentra obligada a dar cumplimiento en los términos ordenados en la sentencia, en el sentido de emitir una

¹³ Visible en <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8464.pdf>

nueva resolución en la que se dé contestación a todos y cada uno de los planteamientos hechos por el partido recurrente.

III. Incumplimiento de motivación reforzada que exige la implementación de una acción afirmativa, por lo que la medida dictada no cumple con los requisitos de idoneidad y necesidad.

Los agravios planteados por el partido impugnante en este apartado serán analizados de conformidad con lo siguiente:

III.1 Respecto de la obligación de expresar una motivación reforzada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido¹⁴ que ni el legislador, ni por ende las autoridades administrativas emisoras de normas generales, están obligados a precisar las razones o circunstancias especiales que se tomó en consideración para expedir una ley, dado que el requisito de motivación se satisface cuando ésta se refiere a situaciones que reclaman ser jurídicamente reguladas.

En efecto, la fundamentación y motivación de los actos se satisface cuando se actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente les confiere a las autoridades emisoras de aquellos (fundamentación) y, cuando las normas que se emite se refieren a relaciones que se reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación).

Por tanto, no es necesario que todas y cada una de las disposiciones que integran las normas deban ser materia de una motivación específica.

Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, enero-junio de 1986, Primera Parte, página 239, bajo el rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.

En relación con la motivación particular de los actos legislativos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que puede ser de dos tipos, a saber: ordinaria y reforzada.

La reforzada se actualiza cuando se emiten actos o normas en donde puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante, desde el punto de vista constitucional, por lo que es indispensable que el legislador razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso.

Tratándose de actos legislativos, es necesaria una motivación reforzada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que, eventualmente, pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate.

En estos casos, el legislador debe ponderar los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar.

¹⁴ Acción de inconstitucionalidad 110/2020, visible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/30590>

Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. En estos casos, la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso, porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo.

Los razonamientos reseñados se encuentran en la jurisprudencia P./J. 120/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1255, de rubro **MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS**¹⁵.

En este sentido, a consideración de este Instituto, tratándose de la implementación de acciones afirmativas, la motivación está inmersa en el fin perseguido por la medida, que es superar la discriminación que históricamente han tenido los grupos en situación de vulnerabilidad destinatarios de las acciones afirmativas. Ello, en virtud de que se trata de una situación que reclama ser jurídicamente regulada, al existir el deber de toda autoridad, en el ámbito de su competencia de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Ley Suprema de la Nación.

En este tenor se ha pronunciado nuestro más Alto Tribunal, al señalar que la igualdad jurídica sustantiva tiene como objetivo remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole, que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real o efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social¹⁶.

También hay que señalar que el referido deber de motivación debe ser acorde a la naturaleza y al objeto del acto que se busca soportar, por lo que no es exigible el mismo grado de justificación respecto de actuaciones sustancialmente diferentes.

En ese sentido, lo ordinario es que en la motivación de actos de naturaleza discrecional se reconozca la existencia de un margen amplio de apreciación de la autoridad encargada de la emisión de la decisión. Esto, a su vez, implica que el estándar de motivación que le es exigible es de razonabilidad.

En efecto, cuando la discrecionalidad administrativa requiera de un juicio de carácter apreciativo, la exigencia constitucional de motivación debe ser cumplida, conforme a un criterio de razonabilidad, que supone una adecuación y consistencia entre lo decidido y los hechos del caso o la naturaleza de la problemática correspondiente.

En ese sentido, lo procedente en estos supuestos es que el control judicial se limite, en su caso, a corregir procedimientos ilógicos, abusivos, irrazonables o arbitrarios (escrutinio débil), al verificar que se hayan acatado los principios que deben regir la actividad administrativa, que se cumplan las reglas de la sana crítica y se apliquen máximas de experiencia que hagan razonable lo decidido.

No obstante, si bien este Instituto cuenta con las facultades para implementar acciones afirmativas a favor de personas pertenecientes a grupos en situación de

¹⁵ Consultable en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/165745>

¹⁶ Consultable en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015679>

vulnerabilidad, tal como lo reconoció la sentencia del propio Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, de fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, en el expediente TEEG-JPDC-211/2021; también lo es que se encuentra obligado a dar cumplimiento a la sentencia de mérito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 423 de la ley electoral local.

Por lo que, atendiendo al sentido de la resolución en cumplimiento, resulta **fundado** el agravio esgrimido por el partido político recurrente ya que el estudio referido permitirá conocer las circunstancias concretas de los grupos, partiendo de datos objetivos y razonables que permitan decidir los términos, condiciones y alcances que tendrán las medidas; elementos que conformarán la argumentación reforzada.

III.2 Por otro lado, en el mismo apartado también hace referencia en particular a que la medida afirmativa no cumple con los requisitos de **idoneidad y necesidad**, vulnerando con ello el principio de representatividad y autodeterminación de los partidos políticos.

Al respecto, el agravio resulta **fundado**, pues de conformidad con lo ordenado por el Tribunal es necesario que previo a la emisión de acciones afirmativas se realice un estudio que arroje datos objetivos y razonables sobre los cuales se puedan decidir los términos, condiciones y alcances que tendrán las medidas afirmativas. Ya que tales datos permitirán identificar las condiciones actuales de los grupos vulnerables sobre de los cuales se pretende maximizar los derechos político-electorales y así colmar la necesidad e idoneidad de las acciones afirmativas.

Así, de la información objetiva que se recabe en el estudio se obtendrán elementos que permitan identificar si es necesaria la implementación de la medida afirmativa para los grupos contemplados en el acuerdo de origen, o si incluso es necesario que la medida afirmativa se extienda a otros grupos vulnerables, así como identificar cual vía de postulación resulta la idónea para cada grupo objeto de la medida. De ahí, que resulte **fundado** el agravio.

III.3 En este apartado, el partido también señala que la acción afirmativa implementada transgrede el principio de **autoorganización y autodeterminación** de los partidos políticos.

Empero, tal y como se refirió previamente, el objetivo perseguido con la instrumentación de la medida afirmativa es permitir la participación de los grupos vulnerables en la postulación de candidaturas a un cargo de elección popular, sin que con ello se transgrede el principio de **autoorganización y autodeterminación** de los partidos políticos, tal y como lo refiere el partido impugnante.

En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de apelación SUP-RAP-121/2020, ha establecido que a pesar de que una postulación de partido sea resultado de un proceso de democracia interna, el partido se verá en la necesidad de sustituirla si es necesario para cumplir con las medidas afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad. De esta forma, la observancia de dichas medidas afirmativas supone un deber de los partidos que regula su actuación, en tanto se encamina a asegurar la igualdad sustancial y la no discriminación en la postulación de candidaturas, y por tanto forma parte de la normativa que rige la vida interna de los partidos y vincula a todas sus instancias y autoridades internas. Por ello, no se contrapone la observancia de las medidas afirmativas con el principio de autoorganización política.

Así, las medidas afirmativas implican, por un lado, un principio que rige los procesos internos de selección de candidaturas y, por el otro, un principio que puede llegar a incidir en el derecho de las y los militantes a ser registrados en una candidatura, esto es, una incidencia en la autoorganización partidista, entendida como el derecho de la asociación de ciudadanas y ciudadanos organizados políticamente en un partido político a definir libremente las condiciones para obtener la postulación respectiva y a otorgar la postulación conforme a esas condiciones.

Lo anterior, considerando que la definición de los procedimientos y requisitos para la selección de las y los precandidatos y candidatos de partido a cargos de elección popular es un aspecto que forma parte de los asuntos internos de los partidos políticos, mismos que se definirán de conformidad con sus reglas internas y, por lo tanto, en atención a su principio de autoorganización.

En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-RAP-21/2021, señaló que es obligación de los partidos políticos el permitir la participación política, en condiciones de igualdad, de los grupos en situación de vulnerabilidad.

«Si bien las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos del marco normativo aplicable, lo cierto es que constitucional, convencional y legalmente, los partidos políticos están obligados a garantizar que personas pertenecientes a grupos excluidos, subrepresentados e invisibilizados -y por tanto en situación de vulnerabilidad- accedan efectivamente y en condiciones de igualdad a sus derechos de participación política.»¹⁷

De conformidad con lo anterior, es que se considera **infundado** el agravio planteado sobre la autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos.

III.4 En el mismo apartado, el partido impugnante señala que no se justificó el por qué se tomó la decisión de que la medida impacte en las candidaturas de mayoría relativa y no en las de representación proporcional, además de que señala que no se especifica si una fórmula es para cada grupo vulnerable o si podían ser las tres para uno solo.

Al respecto, el agravio resulta **fundado**, pues si bien la justificación está inmersa en que al ser postuladas en los distritos de mayoría relativa con mayor votación se incrementa la posibilidad de que las personas postuladas alcancen el triunfo y con ello den representatividad a los tres grupos objeto de la medida afirmativa; así como que al recibir financiamiento público para realizar campaña electoral se les permita hacerse visibles ante la población en general; y que en el acuerdo impugnado se hizo referencia a que las disposiciones que regulen la implementación de la medida afirmativa serían desarrolladas en los Lineamientos correspondientes que para tal efecto se emitieran; lo cierto es que no hay pronunciamiento expreso dentro del acuerdo impugnado que justifique la vía de la postulación ni en la que se especifique si una fórmula es para cada grupo o si podían ser las tres para uno solo. De ahí que resulte fundado el agravio. Por lo que, una vez que se realice el estudio previo esta autoridad electoral podrá precisar lo omitido.

III.5 En el mismo apartado el partido impugnante también hace referencia a que no se cuenta con un **estudio previo** que permita conocer el número de personas que

¹⁷ Consultable en: <https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-21-2021>

conforma cada grupo vulnerable, ni su distribución territorial, así como las posibles repercusiones que pueda tener la medida adoptada.

Al respecto, el agravio resulta **fundado**, ya que en acatamiento a la sentencia es necesario que previo a la emisión de acciones afirmativas se realice un estudio que arroje datos objetivos y razonables —como el número de personas que conforman cada grupo y su distribución territorial— sobre los cuales se puedan decidir los términos, condiciones y alcances que tendrán las medidas, tal y como señaló en su Recomendación N° 32 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, en su 75° periodo de sesiones que tuvo verificativo del 3 al 28 de agosto de 2009.

De conformidad con lo anterior, así como a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato en la sentencia recaída al recurso de revisión TEEG-REV-05/2022, el agravio resulta **fundado**.

IV. Incongruencia interna y externa.

El recurrente aduce la falta de congruencia interna y externa del acuerdo impugnado, refiere que es incongruente en su parte externa, en virtud de que el acuerdo SEGUNDO establece que “Se considera procedente la acción afirmativa”, sin que exista una solicitud al Consejo General para que ello suceda. Asimismo, precisa que lo establecido en el orden del día es el cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TEEG-JPDC-211/2021, por lo que al no desprenderse de esa sentencia lo razonado en el considerando 6 y acuerdo SEGUNDO, denota incongruencia externa.

Aunado a lo anterior, señala que el acuerdo es incongruente en su parte interna, en virtud de que en el proemio se hace referencia al contenido del acuerdo, por lo que la introducción del considerando 6 y acuerdo SEGUNDO son ajenos a la materia del acuerdo.

Al respecto debe señalarse que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que las acciones afirmativas contenidas en el considerando 6 fueron emitidas en base a la facultad reglamentaria que tiene esta autoridad electoral, esto es, dentro de la esfera de atribuciones con las que cuenta para emitir lineamientos y reglamentos, por lo que no es necesario que exista una vinculación con la litis establecida en materia de acciones afirmativas de diputación migrante establecida por el Tribunal.

Por ende, existe una congruencia externa en el considerando 6 del acuerdo impugnado máxime que el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en su acuerdo plenario de fecha veintidós de marzo, dentro el expediente TEEG-JPDC-211/2021, precisó lo siguiente:

«Por otro lado, el hecho de que en el “punto 6” del acuerdo impugnado se haya emitido de manera adicional acciones afirmativas para distintos grupos en situación de vulnerabilidad como personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, ello no constituye un exceso en el cumplimiento de la sentencia, dado que el Consejo General cuenta con una amplia facultad reglamentaria que le permite emitir tales medidas sin que necesariamente dependan de una resolución del Tribunal para que pueda desplegarla.»

En esta misma tesitura, contrario a la señalado por el recurrente, el considerando 6 del acuerdo materia del recurso guarda congruencia interna, pues existe una armonía y vinculación entre el considerando 6 con el punto de acuerdo segundo,

esto es, en el considerando 6 se desarrollan las acciones afirmativas para distintos grupos en situación de vulnerabilidad como personas en condiciones de discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual siendo que en el punto de acuerdo segundo se valida su procedencia haciendo alusión directa al considerando de referencia.

Por lo tanto, dicha circunstancia supera la denominación misma del acuerdo, máxime que dichas acciones afirmativas fueron emitidas en base a su facultad reglamentaria que le confiere la ley electoral local a este Instituto.

De ahí que **no le asista la razón** a la parte impugnante.

V. Vulneración al principio de proporcionalidad.

V.1 Refiere la parte recurrente que la medida afirmativa sobre personas con discapacidad, de la diversidad sexual y afromexicanas establecida en el acuerdo CGIEEG/015/2022, no observa la jurisprudencia 30/2014 de rubro “ACCIONES AFIRMATIVAS, NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN”, dado que la acción afirmativa no es proporcional ni atiende a criterios razonables y objetivos, sino que es excesiva, lo cual pretende acreditar con datos estadísticos de elaboración propia.

Al respecto, el agravio resulta **parcialmente fundado**, pues como ya se señaló es necesario que previo a la emisión de acciones afirmativas se realice un estudio que arroje datos objetivos y razonables, tal y como lo ordenó el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en la sentencia en cumplimiento. Pues tales medidas deben concebirse o aplicarse en función de las necesidades y basarse en datos precisos y desglosados.

Por ello, este órgano electoral deberá realizar un estudio previo que proporcione datos objetivos que permitan la toma de decisiones sobre los términos, condiciones y alcances que tendrán las medidas y con ello, acreditar su necesidad, idoneidad y proporcionalidad, reflejando la realidad y condiciones más actuales de los grupos vulnerables sobre de los cuales se pretende maximizar sus derechos político-electorales.

V.2 En el mismo apartado, el partido impugnante también hace referencia a que no se utilizaron criterios objetivos y racionales para determinar el número de fórmulas de la acción afirmativa, para lo cual presentó diversos **datos estadísticos** de los grupos objeto de la acción afirmativa, que a su consideración se debieron observar al emitir el acuerdo materia del presente recurso.

Al respecto, el agravio resulta **parcialmente fundado**, pues tal y como se señaló en supra líneas de conformidad con lo ordenado por el Tribunal, es necesario que previo a la emisión de acciones afirmativas se realice un estudio que arroje datos objetivos y razonables —como el número de personas que conforman cada grupo y su distribución territorial— sobre los cuales se puedan decidir los términos, condiciones y alcances que tendrán las medidas para así colmar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las acciones afirmativas con base en datos precisos y desglosados para reflejar la realidad y condiciones más actuales de los grupos vulnerables sobre de los cuales se pretende maximizar los derechos político-electorales.

De conformidad con lo anterior y en atención a lo ordenado por el Tribunal, este órgano tomará los datos estadísticos de carácter sociodemográficos emitidos por las autoridades e instituciones de investigación en la materia y no los presentados por la parte actora, pues si bien manifiesta que fueron obtenidos de instituciones oficiales las presenta como de elaboración propia. De ahí, que resulte **parcialmente fundado** el agravio.

VI. Vulneración a los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos.

El partido recurrente señala que la determinación de aplicar la medida afirmativa en los distritos de mayoría relativa con mayor votación vulnera su autodeterminación y autoorganización, pues sólo las autoridades electorales pueden intervenir en los términos que señala la Constitución y la ley; restringiendo así la posibilidad de que el partido político postule fórmulas en distritos de media o baja competitividad, pero en los que exista liderazgo o población que demanda la representación política. Sumado a que las postulaciones por la vía de mayoría relativa podrían alcanzar una diputación de representación proporcional de conformidad con el marco legal vigente, abriendo así la posibilidad de una sobre representación.

Al respecto es conveniente señalar lo siguiente:

Si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido¹⁸ que a pesar de que una postulación de partido sea resultado de un proceso de democracia interna, el partido se verá en la necesidad de sustituirla si es necesario para cumplir con las medidas afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad. De esta forma, la observancia de dichas medidas afirmativas supone un deber de los partidos que regula su actuación, en tanto se encamina a asegurar la igualdad sustancial y la no discriminación en la postulación de candidaturas, y por tanto forma parte de la normativa que rige la vida interna de los partidos y vincula a todas sus instancias y autoridades internas. Por ello, **no se contrapone la observancia de las medidas afirmativas con el principio de autoorganización política.**

Así, las medidas afirmativas implican, por un lado, un principio que rige los procesos internos de selección de candidaturas y, por el otro, un principio que puede llegar a incidir en el derecho de las y los militantes a ser registrados en una candidatura, esto es, una incidencia en la autoorganización partidista, entendida como el derecho de la asociación de ciudadanas y ciudadanos organizados políticamente en un partido político a definir libremente las condiciones para obtener la postulación respectiva y a otorgar la postulación conforme a esas condiciones.

Lo anterior, considerando que la definición de los procedimientos y requisitos para la selección de las y los precandidatos y candidatos de partido a cargos de elección popular es un aspecto que forma parte de los asuntos internos de los partidos políticos, mismos que se definirán de conformidad con sus reglas internas, y por lo tanto en atención a su principio de autoorganización.

En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-RAP-21/2021¹⁹, señaló que si bien las autoridades solamente pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos

¹⁸ Ver la resolución recaída al expediente SX-JDC-931/2021, disponible en <https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JDC-0931-2021.pdf>

¹⁹ Consultable en: <https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-21-2021>

políticos en los términos del marco normativo aplicable, lo cierto es que constitucional, convencional y legalmente, los partidos políticos están obligados a garantizar que personas en situación de vulnerabilidad accedan en condiciones de igualdad a sus derechos políticos.

Por lo que se considera como **infundado** el agravio planteado sobre la autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos.

VII. Falta de motivación y fundamentación.

De las garantías del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con las establecidas en el artículo 16 se advierten los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe resguardar.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para considerar que los actos de molestia están apegados a la Constitución Federal, resulta necesario que cumplan con los requisitos establecidos en su artículo 16, esto es, que sean emitidos por escrito, por una autoridad competente y que se encuentren fundados y motivados.

En tanto que, respecto de los actos privativos, resulta necesario que se cumplan los requisitos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, que sean emitidos previo juicio seguido ante los tribunales establecidos, en los que se observen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; siendo dichas formalidades aquellas que permitan a la parte afectada el conocimiento del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y expresar alegatos.

Así, los requisitos que deben contener los actos de autoridad son:

- Constar por escrito, es decir, que pueda ser mostrado gráficamente al destinatario, a fin de que pueda verificar si fue emitido o no por autoridad competente y si se encuentra o no fundamentado y motivado; además de que las atribuciones de las autoridades del Estado se materializan, precisamente, hasta que constan escritas;
- Provenir de autoridad competente, es decir, de aquella a la que corresponde su emisión, precisamente, porque así le faculta la normativa que rige su actuar, el cual debe ajustarse a la propia norma; y,
- Contener la adecuada fundamentación y motivación, que implica apoyar la determinación respectiva en razones legales, contenidas en la norma y explicar los motivos que conducen a su emisión, en el entendido de que, entre ambas exigencias, debe existir congruencia.

Ahora bien, el contenido del acuerdo impugnado permite advertir que consta por escrito y proviene de una autoridad competente. Sin embargo, tal y como ya se refirió, la determinación asumida en el considerando 6 del acuerdo CGIEEG/015/2022 carece de un estudio que arroje datos objetivos y razonables sobre los cuales se puedan definir los términos, condiciones y alcances que tendrán las medidas adoptadas en dicho considerando.

Por lo que conforme al artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad que implique alguna molestia para los gobernados, debe estar adecuado y

suficientemente fundado y motivado, en el entendido de que lo primero es la cita precisa de las disposiciones legales aplicables al caso concreto y, lo segundo, la expresión de las razones o causas que se hubieren tenido en consideración para el pronunciamiento del acto combatido pero, además, debe existir congruencia entre los motivos expuestos y los preceptos aplicados.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro **"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN"** publicada en el Apéndice 1917-2000, Tomo VI, jurisprudencia SCJN, Materia: común, Tesis: 204, Página: 166, Instancia: Segunda Sala, Tesis: jurisprudencia.

En este sentido, la falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa.

En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección.

Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica.

En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto.

La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto impugnado, procederá su anulación; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección.

Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la sentencia serán diversos en uno y otro caso, pues, aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto ilegal, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el

segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente.

Lo anterior encuentra apoyo además en la tesis de jurisprudencia de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR²⁰.

Ahora bien, en el caso en estudio, no se desprende en modo alguno que el acto impugnado carezca de fundamentación y motivación, como erróneamente lo manifiesta la parte impugnante.

En efecto, basta tan solo recurrir a su contenido para que se desprenda de manera indubitable que dicha actuación contiene la fundamentación y motivación que se consideró por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para apoyar su determinación en determinadas razones legales, así como los motivos que condujeron a la decisión.

Sin embargo, si bien en el considerando 6 del acuerdo CGIEEG/015/2022, se advierten las disposiciones constitucionales, convencionales y legales, así como precedentes jurisdiccionales nacionales e internacionales en las que se sustenta la determinación; así como los razonamientos lógico-jurídicos que llevan a la adopción de la medida afirmativa; a la luz de lo señalado por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en la sentencia en cumplimiento se advierte que la motivación deriva insuficiente.

Lo anterior dado que los motivos o razones no son bastantes para la implementación de la medida afirmativa que se pretende, pues la motivación debió tener como sustento un estudio con datos objetivos y razonables que permitan la toma de decisiones sobre los términos, condiciones y alcances que tendrán las medidas y acreditar su necesidad, idoneidad y proporcionalidad para que reflejen la realidad y condiciones más actuales de los grupos vulnerables sobre de los cuales se pretende maximizar los derechos político-electorales.

En ese tenor, se concluye como **parcialmente fundado** el agravio expuesto por la recurrente.

4. Modificación del acuerdo CGIEEG/015/2022. De conformidad con lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en la sentencia dictada dentro del recurso de revisión TEEG-REV-05/2022 —respecto a la necesidad de realizar un estudio previo a la emisión de las medidas afirmativas en favor de personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, así como darles en ello la participación que merecen tales grupos—, y al resultar parcialmente fundados los agravios relativos a la ausencia de motivación y fundamentación; al incumplimiento de motivación reforzada que exige la implementación de una acción afirmativa, por lo que la medida dictada no cumple con los requisitos de idoneidad y necesidad; la vulneración al principio de proporcionalidad; lo procedente es que este Consejo General modifique el acuerdo CGIEEG/015/2022.

La modificación del acuerdo CGIEEG/015/2022 consistirá en dejar sin efectos su considerando 6, ya que no se cuenta con un estudio previo que aporte elementos objetivos y datos precisos para la construcción de una acción afirmativa a favor de

²⁰ <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170307>

los mencionados grupos vulnerables; sumado a que la medida adoptada no fue puesta a consideración de la población objeto de esta.

Debido a lo anterior, se ordena a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, elabore el proyecto de acuerdo correspondiente.

5. Acciones para cumplir con el estudio ordenado en la sentencia TEEG-REV-05/2022. La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación fue creada mediante el acuerdo CGIEEG/330/2018²¹, en el que se establecieron sus objetivos y atribuciones.

Al respecto, el artículo 40 bis del *Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato* establece que la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación tendrá por objeto promover los derechos humanos, propiciar que la igualdad de género y la no discriminación se observe por las áreas del Instituto, así como promover acciones relativas a la prevención y atención de la violencia política electoral contra las mujeres en razón de género.

Mientras que el artículo 40 ter, del reglamento en cita, señala las atribuciones que tiene la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en las que se destacan las siguientes:

«I. Diseñar e implementar programas y proyectos con base en la Política de Igualdad de Género y **No Discriminación** del Instituto, así como dar seguimiento a las acciones que se realicen con motivo de su ejecución;

[...]

IV. Presentar propuestas de creación o modificación de reglamentos, así como de dictámenes, acuerdos, resoluciones, lineamientos, guías, políticas, protocolos y manuales de organización o de procesos que deba emitir el Instituto en materia de igualdad de género y **no discriminación**, participación política de las mujeres y violencia política en razón de género;

[...]

XI. Las demás que le confiera la Ley, otras disposiciones y el Consejo General.»

Lo resaltado es propio.

De conformidad con lo anterior, este Consejo General considera pertinente que tal Unidad realice el estudio previo a emitir medidas afirmativas en favor de las personas integrantes de los grupos vulnerables que se identifiquen en el estudio, así como darles en ello la participación que merecen tales grupos.

Por lo que se determina instruir a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación que, con base en sus atribuciones, elabore el estudio ordenado en la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, en el que deberá dar participación a los grupos objeto del estudio, para su posterior remisión a este Consejo General para, con base en el mismo, llevar a cabo la determinación y eventual aprobación de las medidas afirmativas que, en su caso, correspondan.

El estudio deberá observar las directrices establecidas por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato relativas a atender las características específicas de los grupos vulnerables cuya situación de injusticia o desventaja se pretende compensar, ya que estos tienen diferentes situaciones geográficas, económicas y sociales, pero además podrá contemplar otros elementos que se identifiquen como necesarios en el desarrollo del estudio e incluso, otros grupos vulnerables.

²¹ Aprobado en sesión extraordinaria del 18 de octubre de 2018, disponible en <https://www.ieeg.mx/documentos/181018-extra-i-acuerdo-330/>

Asimismo, buscará conocer el número de personas que conforman cada grupo; cómo y en dónde se distribuyen, a fin de conocer su grado de representación en el territorio del Estado.

Así, al obtener datos objetivos, precisos y razonables del estudio que realice la Unidad, este Consejo General podrá determinar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de posibles acciones afirmativas.

A efecto de realizar lo anterior, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación elaborará un plan de actividades a desarrollar, mismo que pondrá a consideración del Consejo General para su aprobación a más tardar en diciembre del año en curso, en el que se considerará que la posible emisión de acciones afirmativas deberá ser previa al inicio del próximo proceso electoral local 2023-2024.

Asimismo, dicha Unidad deberá informar los avances del estudio, de conformidad con el plan de actividades que apruebe este Consejo General.

4. PUNTOS RESOLUTIVOS.

PRIMERO. Son infundados los agravios relativos al exceso en el cumplimiento de sentencia, la transgresión del principio de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos y el relativo a la incongruencia interna y externa.

Resultan fundados los agravios relativos al incumplimiento de motivación reforzada, la falta de idoneidad y necesidad, la no justificación de la vía de la postulación y la ausencia de un estudio previo.

Resultan parcialmente fundados los agravios relativos a la ausencia de motivación y fundamentación, la vulneración al principio de proporcionalidad y la ausencia de criterios objetivos y racionales.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva, para que por medio de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, elabore el proyecto de acuerdo correspondiente para modificar el diverso CGIEEG/015/2022 emitido por este Consejo General, mediante el cual se dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente TEEG-JPDC-211/2021.

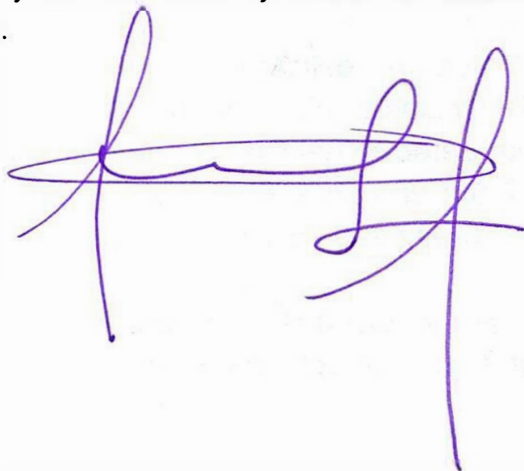
La modificación consistirá en dejar sin efectos el considerando **6** y el punto de acuerdo **SEGUNDO**.

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva, para que por medio de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, elabore un proyecto de acuerdo en el que se instruya a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación que elabore el estudio ordenado en la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato de conformidad con lo establecido en el considerando **5** de la presente resolución.

Notifíquese personalmente con copia certificada de la presente resolución al partido político recurrente; por oficio al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato; y por estrados.

La presente resolución se aprobó por mayoría de votos de las consejeras electorales Brenda Canchola Elizarraraz, Sandra Liliana Prieto de León, María Concepción Esther Aboites Sámano y Beatriz Tovar Guerrero, quien anunció voto concurrente, así como de los consejeros electorales Antonio Ortiz Hernández y Luis Gabriel Mota; y con el voto en contra de la consejera electoral Nora Maricela García Huitrón, en la sesión extraordinaria del veintidós de noviembre de dos mil veintidós.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, la firman la presidenta del Consejo General y la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Conste.



VOTO CONCURRENTENTE

QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL BEATRIZ TOVAR GUERRERO, EN RELACIÓN CON EL PUNTO IV DEL ORDEN DEL DÍA RELATIVO AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACUERDO CGIEEG/015/2022, DICTADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO EN EL RECURSO DE REVISIÓN TEEG-REV-05/2022. APROBADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión extraordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2022, aprobó por mayoría de votos la resolución del recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo CGIEEG/015/2022, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en el recurso de revisión TEEG-REV-05/2022.

Con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 93 Bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como lo señalado en el artículo 6, fracción XII del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y lo previsto en el segundo párrafo del artículo 58 del Reglamento de sesiones de órganos colegiados del Instituto, emito un **VOTO CONCURRENTENTE**, puesto que si bien es cierto, de forma general existe coincidencia en el sentido de la decisión, no comparto lo escrito en el párrafo cuarto del quinto considerando, así como lo instruido en el segundo punto resolutivo a través de los cuales se determina que la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación sea quien elabore el estudio ordenado en la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato a la luz de las siguientes razones:

En el mes de enero de la presente anualidad fueron presentados y aprobados por la Junta Estatal Ejecutiva de este Instituto los Programas Anuales de Trabajo 2022 de las Unidades responsables.

De manera particular en el Programa Anual de Trabajo de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral se aprobó el proyecto estratégico de "Vinculación con grupos en situación de vulnerabilidad" con el objetivo específico de contar con información que permita determinar acciones y mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos político electorales de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y que a su vez tiene como una de sus actividades elaborar un estudio sobre grupos en situación de vulnerabilidad

De manera mensual, trimestral y anual se presenta ante el Consejo General de este Instituto el Informe de Actividades las Direcciones, unidades Técnicas, y Juntas Ejecutivas Regionales de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

En seguimiento a lo anterior en la sesión ordinaria del treinta y uno de marzo del Consejo General, en el sexto punto del orden del día se presentó el Informe mensual de actividades de las Direcciones, Unidades Técnicas y Juntas Ejecutivas Regionales de la Junta Estatal Ejecutiva; en donde la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral, en el objetivo específico E3.1 relativo a "contar con información que permita determinar acciones y mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad" informo que el estudio sobre grupos en situación de vulnerabilidad de encuentra en desarrollo.

Ante esta información durante el desarrollo de la sesión y en el punto del orden del día correspondiente pregunte mis inquietudes ante el estudio que se esta realizando y sobre el cual mencioné que llamaba mi atención esta situación por varias cosas, la primera porque el año pasado, en dos mil veintiuno, la de la voz en mi entonces carácter de presidenta de la Comisión Temporal de Reglamentos solicité a consejeras y consejeros se incorporara en el proyecto de presupuesto dos mil veintidós un recurso que nos permitiera llevar a cabo un estudio para determinar, primero, cuántos grupos en situación de vulnerabilidad existen en Guanajuato, identificar sus condiciones sociodemográficas, con datos también estadísticos, aspectos incluso de participación política y electoral, precisamente que nos diera elementos este estudio para poder tener una base documentada, fundada y motivada para emitir acciones afirmativas a favor de estos grupos.


En su momento lamentablemente no encontré el apoyo de la mayoría de los integrantes de este Consejo de manera tal que en la Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral únicamente se enfoco en llevar a cabo el análisis y en su caso implementación de acciones afirmativas para garantizar la inclusión de personas indígenas en el Congreso del Estado.

Por lo anterior en uso de la voz solicite se me enviara una respuesta por escrito a mi oficina acalorando el tema.


En respuesta a esta solicitud, el veintiseis de abril del año en curso mediante correo electrónico la secretaria ejecutiva de este Instituto me comparte una explicación a mayor profundidad sobre el tema, en donde concluye que de la información proporcionada por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral se precisa que, en dicha área se está realizando el estudio relativo a grupos en situación de vulnerabilidad a fin de determinar acciones y mecanismos tendentes a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos-electorales de las personas pertenecientes a los mismos. En este sentido, el estudio en cuestión tendrá como finalidad, por una parte, contar con elementos para, en su

caso, presentar propuestas y recomendaciones respecto de las acciones afirmativas ya implementadas por este Instituto y; por otro lado, precisar los términos y alcances de las normas reguladoras del registro de candidaturas que se contengan en los lineamientos para el registro de candidaturas para el proceso electoral 2023-2024, con la finalidad de garantizar una inclusión real en la participación política de los mencionados grupos.

En ese sentido, si existe un objetivo específico de una Unidad en este caso la UTJCE para contar con información que permita determinar acciones y mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad”, en donde el entregable es un “Estudio sobre grupos en situación de vulnerabilidad”, consideraría correcto que a la luz de la sentencia dictada por el Tribunal fuera esta Unidad la que continuará con el desarrollo de este proyecto en coordinación en su caso con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, así como con cualquier otra área que pueda aportar al estudio, ya que la UTJCE está realizando este estudio que termina de acuerdo a su Programa Anual de Actividades 2022 en diciembre, en ese sentido lo que habría que hacer entonces es darle continuidad a la actividad en el PAT 2023 de Unidad, claro con aspectos de mejora detectados como una metodología, entregables precisos, consultas a grupos y personas en situación de vulnerabilidad, y por su puesto dotarle de recurso suficiente para su desarrollo, además de generar un trabajo conjunto y transversal entre las áreas que se considere pertinente de este Instituto.

 Al ser un trabajo de distintas áreas del Instituto, este debería ser coordinado por la secretaria ejecutiva ya que como lo establece el artículo 96 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato la secretaria ejecutiva conducirá la administración y supervisará el desarrollo de las actividades de las direcciones y de los órganos técnicos de la misma.

En conclusión y por los argumentos anteriormente vertidos es que considero idóneo la determinación de una estrategia de trabajo interinstitucional y coordinado desde la secretaria ejecutiva de este Instituto.



Mtra. Beatriz Tovar Guerrero.
Consejera Electoral.